



Resolución reclamación art. 24 LTAIBG

N/REF: 1233-2024

Fecha: La de la firma

Reclamante: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Administración/Organismo: Ayuntamiento de Mérida (Badajoz).

Información solicitada: Aportaciones económicas en clubes deportivos

Sentido de la resolución: Estimatoria.

Plazo de ejecución: 20 días.

JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ (1 de 1)
Resolución: 13/09/2024
Firma: [REDACTED]
HASH: 03008830806616b2b4042a2545895983

I. ANTECEDENTES

- Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 9 de abril de 2024 el ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) la siguiente información, sobre información de aportaciones económicas en clubes deportivos:

“Es por todo lo expuesto, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la que se establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, le formulo las siguientes preguntas, las cuales solicito sean contestadas, por escrito, en el plazo legalmente establecido por la citada Ley:

1. Importes individualizados, que el Ayuntamiento de Mérida ha cobrado a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, por el uso de las instalaciones deportivas municipales, durante la temporada 2020-21:

- IMPERIO DE MÉRIDA CP
- EF EMERITA
- CD ATLETICO ROMANO
- CD NUEVA CIUDAD



e. CD LA CORCHERA

f. PIZARRO CF

g. MERIDA AD SAD

h. ESCUELA DE FUTBOL DEL MERIDA AD

i. EQUIPO DE BALONMANO DEL COLEGIO DE LAS JOSEFINAS

2. Importes individualizados, que el Ayuntamiento de Mérida ha cobrado a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, por el uso de las instalaciones deportivas municipales, durante la temporada 2021-22 (para los mismos equipos que la pregunta anterior):

3. Importes individualizados, que el Ayuntamiento de Mérida ha cobrado a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, por el uso de las instalaciones deportivas municipales, durante la temporada 2022-23: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

4. Importes individualizados, que el Ayuntamiento de Mérida ha cobrado a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, por el uso de las instalaciones deportivas municipales, durante la temporada 2023-24 (Hasta la fecha de presentación de este escrito): (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

5. Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2020: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

6. Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2021: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

7. Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2022: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

8. Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2023: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):



9. Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2024: (para los mismos equipos que la primera pregunta anterior):

10. Importe, de cualquier tipo, invertido en el Estadio Romano JOSÉ FOUTO, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de manera individualizada por años.

11. Importe, de cualquier tipo, invertido en los Campos de la FEDERACIÓN, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de manera individualizada por años.

12. ¿Existe, en vigor, algún tipo de convenio con la Federación Extremeña de Fútbol para el uso de las citadas instalaciones? En el caso afirmativo ruego me faciliten una copia o me indiquen donde puedo obtenerla.

13. ¿Hay algún tipo de subvención, contrato publicitario, patrocinios o cualquier tipo de ayuda comprometida para el año 2025? Me gustaría conocer el importe y la entidad receptora”

2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013¹, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 8 de julio de 2024, con número de expediente 1233-2024.
3. El 9 de julio de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Mérida, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas.
4. En la fecha en que se dicta la presente resolución no se han recibido alegaciones al requerimiento efectuado.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.², el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG³ se presenten frente a

¹ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>

² <https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/07/02/615>

³ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a24>



las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.

2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG⁴, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio⁵ vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiéndose por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”.

Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.

4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a determinada información sobre una determinada información económica en diferentes clubs deportivos, por lo que la información cuyo acceso se pretende, tiene la consideración de pública a los efectos de la LTAIBG y no ha sido facilitada al reclamante.
5. En presente caso, como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle

⁴ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#dacuaa>

⁵ https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion-econ/convenios/conveniosCCAA.html



ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida la puesta a disposición de la información solicitada.

Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso dentro del plazo legal, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública.

A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos:

«La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información».

De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La



aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).»

A la vista que cuanto antecede, dado que lo solicitado tiene la consideración de información pública, que la administración reclamada no ha justificado de forma adecuada y suficiente la concurrencia de alguna causa de inadmisión del artículo 18⁶, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14⁷ y 15⁸ este Consejo debe estimar la reclamación presentada, en los términos anteriormente indicados.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede:

PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Mérida.

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Mérida a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información:

- Importes individualizados, que el Ayuntamiento de Mérida ha cobrado a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, por el uso de las instalaciones deportivas municipales, durante la temporada 2020-21, temporada 2021-22, temporada 2022-23 y temporada 2023-24 de los equipos señalados en la solicitud.
- Importes individualizados, por equipos, de subvenciones, contratos publicitarios, patrocinios o cualquier tipo de ayuda, que el Ayuntamiento de Mérida ha concedido a los equipos deportivos o Sociedad Anónima Deportiva, durante el año 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 de los equipos señalados en la solicitud.

⁶ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a18>

⁷ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a14>

⁸ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a15>



- Importe, de cualquier tipo, invertido en el Estadio Romano JOSÉ FOUTO, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de manera individualizada por años.
- Importe, de cualquier tipo, invertido en los Campos de la FEDERACIÓN, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de manera individualizada por años.
- Informar si existe algún tipo de convenio con la Federación Extremeña de Fútbol para el uso de las citadas instalaciones y en el caso afirmativo se le proporcionará una copia.
- Informar si hay algún tipo de subvención, contrato publicitario, patrocinios o cualquier tipo de ayuda comprometida para el año 2025 y en caso afirmativo, conocer el importe y la entidad receptora.

TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Mérida a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno⁹, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas¹⁰.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa¹¹.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

⁹ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a23>

¹⁰ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&tn=1&p=20181206#a112>

¹¹ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9>